

E

Editorial

Recuperación de barrios

La intervención estatal debe garantizar que el desalojo de la delincuencia no signifique sólo su traslado a otros puntos de Osorno.

El anuncio del Plan de Intervención en Barrios Críticos, que en la Región de Los Lagos pondrá el foco en sectores como Rahue Alto en Osorno y Alerce en Puerto Montt, constituye una respuesta estatal necesaria ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico. La decisión de recuperar espacios que han sido cooptados por bandas delictuales –muchas de ellas con nexos extranjeros y tácticas de reclutamiento de menores– mediante desalojos y demoliciones de “casas fachada”, es una medida de fuerza que busca restablecer la presencia de la ley donde el Estado parecía haber retrocedido. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia no puede medirse únicamente por la cantidad de estructuras derribadas o el despliegue policial de las primeras jornadas. Experiencias anteriores, que datan desde inicios de siglo, demuestran que si la intervención no es integral, el riesgo de “migración delictual” es alto. Como bien advierten las dirigencias vecinales, el peligro reside en que, al desarticular un foco en una toma específica como la “Folilche”, a orillas de la ruta al mar, el fenómeno simplemente se desplace a cuerdas de distancia si no existe un control territorial permanente y una inversión social profunda. Para que este plan sea exitoso, la coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales es imperativa. Resulta preocupante que, a estas alturas de la planificación, existan municipios que declaren no haber recibido información oficial detallada. El conocimiento del terreno que poseen las administraciones locales y sus alcaldes es un activo que el Ejecutivo no puede obviar si pretende que las acciones del primer semestre tengan sostenibilidad en el tiempo. La seguridad no se construye sólo con decretos de demolición, sino con una mesa de trabajo donde todos los actores públicos hablen el mismo idioma. La recuperación de la dignidad en los barrios pasa por transformar los sitios eriazos y las tomas ilegales en espacios públicos de calidad, como plazas o parques, y por ofrecer soluciones habitacionales definitivas que separen al delincuente de la familia vulnerable. La intervención en Rahue Alto y Alerce es una oportunidad histórica para demostrar que el Estado es capaz de ganar la batalla contra el miedo, siempre y cuando la fuerza de la ley vaya acompañada de la fuerza de la gestión urbana y la integración social.